

Boletín Oficial.



PROVINCIA DE ORENSE.

— Boletín y otros — 1879

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS DOMINGOS.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Orense, por trimestre, 7 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 8 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos. Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos, Colón, número 16. En las demás provincias, en las principales librerías.

ADVERTENCIA OFICIAL.
Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 23 de Noviembre de 1857.) Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que demandando las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del BOLETIN.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey D. Alfonso y la Reina Doña María Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutaban S. A. R. la Serma. Sra. Princesa de Asturias, las Serenísimas Señoras Infantas Doña María de la Paz y Doña María Eulalia.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES ORDENES.

Remitido a informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Prieto de la Fuente y demás individuos que fueron del Ayuntamiento de Becerreá contra una providencia de V. S. condenándoles al pago de cantidades por resultado de cuentas municipales correspondientes al ejercicio de 1869-70. La Sección de Gobernación de

aquel alto Cuerpo lo ha evacuado en los siguientes términos:

Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Prieto y demás individuos que fueron del Ayuntamiento de Becerreá contra una providencia del Gobernador de la provincia de Lugo exigiéndoles el pago de 843 escudos 876 milésimas por resultado de las cuentas municipales de 1869-70.

Pasada a informe de la Comisión provincial, y después de diversas contestaciones dadas por el Alcalde y por los herederos del Depositario D. Francisco Grandas a los reparos que dichas cuentas ofrecieron, apareció un descubierto de 843 escudos 876 milésimas en la forma siguiente: 105 y 252 recaudados de menos en los recursos legales para cubrir el presupuesto y 738 con 624 por cuenta de 834 y 429 que como resultas de los años anteriores figuraban en presupuestos y procedían de las quintas partes de recargos municipales que en el año de la cuenta existían en la Tesorería de provincia de los cuales se incautó el Estado y compensó luego con la contribución de impuesto personal que el Ayuntamiento debió satisfacer en el propio año.

El Gobernador de la provincia en 25 de Mayo de 1878 declaró al ex-Alcalde D. Francisco Prieto obligado a reintegrar la expresada suma de 843 escudos 876 milésimas, sin perjuicio de las reclamaciones que aquel estimase hacer al Recaudador y Depositario Grandas por la vista de la cuenta puesta por Prieto y de nuevas ex-

plikaciones de los herederos de Grandas, la expresada Autoridad en 23 de Enero de 1879 declaró responsable de aquella suma al Alcalde y demás Concejales, fundándose en que no cumplieron el deber que la ley municipal de 1868 entonces vigente les imponía.

De esta resolución han apelado los interesados para ante el Gobierno, exponiendo que la cantidad de 843 escudos 876 milésimas que se le manda reintegrar procede de lo que se recaudaron de menos de 105 con 252 por los recursos legales autorizados para cubrir el presupuesto, 738 con 624 que se suponen también recaudados de menos por los recargos municipales que en el año de la cuenta existían en la Tesorería de provincia y fueron compensados con el impuesto personal que el Ayuntamiento debió satisfacer en el propio año; que de los 105 y 252 el único responsable lo era el Recaudador por no haber presentado oportunamente las relaciones de contribuyentes morosos, y que en cuanto a los 738 con 624 no había razón para que los Concejales reclamasen los reintegrasen, puesto que ingresaron en Depositaria, como lo acreditaba el cargareme número 8 comprendido en la relación de cargo.

La Sección examinará el recurso bajo el punto de vista de si la providencia apelada adolece ó no de infracción legal, partiendo para ello del resultado que ha ofrecido el examen de cuentas, acerca de las cuales nada debe decir por no tenerlas a la vista. Reducidos todos los documentos que constituyen el expediente a una copia que

contiene los pliegos de reparos, las contestaciones dadas a ellos, los informes emitidos por la Comisión provincial, las y resoluciones del Gobernador, se ignora completamente la naturaleza y clase de los recursos no cobrados, los contribuyentes que dejaron de pagar incluidos en las listas que se daban formalmente, así como también las indicaciones y conceptos de los cargaremes, especialmente de uno que se asegura estar enmendado por todo lo cual sin entrar en el fondo de la cuenta, se limitará la Sección, haciendo cargo de su estado bien terminada como arreglo a la ley la responsabilidad impuesta al Ayuntamiento reclamante. El art. 144 de la ley municipal de 21 de Octubre de 1868, vigente en la época a que las cuentas se refieren, puesto que hasta Febrero de 1872 no empezó a regir la de 1870, establecía que los Depositarios y agentes de la recaudación eran responsables ante el Ayuntamiento, y que este lo quedaba sin embargo civilmente ante el Municipio en caso de insolvencia de aquellos, y salvo el derecho contra los mismos; y como en el presente caso, lejos de exigir la responsabilidad al Recaudador o a sus herederos, y subsidiariamente al Ayuntamiento, se ha prescindido por completo de los primeros, haciéndola pasar desde luego sobre los Concejales respecto de los cuales tampoco se ha acreditado que se hallen comprendidos en algunos de los casos a que alude el art. 101 del Real decreto de 20 de Mayo de 1845 resulta de todo ello que la providencia del Gobernador no está

debidamente fundada, por cuanto solamente dice que los mismos Concejales no cumplieron el deber de la ley de 1868 les imponía, sin citar texto expreso de la misma. Pero hay que tener presente que una parte del descubierto procede de haberse dejado de figurar en el cargo la totalidad de los recursos consignados en el presupuesto; y siendo así, ocurrese desde luego que si estos se hicieran efectivos, debe responder de ellos el Recaudador Depositario en cuyo poder ingresaron, y en caso de insolvencia, el Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo antes citado; y si es que dejaron de satisfacer los algunos vecinos, como hace suponerlo el haberse formado una lista de contribuyentes morosos, estos son los que tienen obligación de pagar sus respectivas cuotas, dado que la prescripción establecida en el art. 13 de la instrucción de Diciembre de 1869, igual al del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, en virtud del cual deja de ser exigible al contribuyente toda cuota no reclamada en el espacio de dos años, no puede ser invocada por aquellos, mediante que hasta la ley de 20 de Agosto de 1870 no se hicieron extensivas á la Hacienda municipal las disposiciones dictadas para la recaudación de las contribuciones generales del Estado. En este concepto procede que ante todo se averigüe por los recibos que deban obrar en el Ayuntamiento qué cantidades cobró el Recaudador Depositario de los cuales debe responder, y cuáles dejaron de cobrarse de los contribuyentes y hayan de serles exigidas.

Procede otra parte del descubierto reclamado de que existiendo en la Tesorería de provincia 834 escudos 429 milésimas pertenecientes al Municipio por recargos en las contribuciones, se mandó compensar este crédito con lo que aquel debía al Estado por impuesto personal, compensación que tuvo lugar por valor de 738 con 624, de cuya suma no se hace mención, según parece, por el Alcalde y el Depositario en sus respectivas cuentas, mediando en esto además la circunstancia de que en la relación núm. 1 de cargo de la de este último, se estampó la suma de 3.966 y 218, siendo

así que la de todos los cargámenes que la misma comprende hace un total de 4.568 y 218; diferencia que procede de hallarse enmendado, según se dice, uno de ellos, representando sus guarismos ciento setenta y nueve con cuatrocientos diez y ocho, en vez de setecientos setenta y nueve, cuatrocientos diez y ocho, expresados en letra en el cuerpo del expresado cargáme; y mientras los herederos del Depositario Grandas sostienen que el verdadero valor es 179.418, el Alcalde pretende que es 779.418; sea de esto lo que quiera, puesto que enmendados también, según parece los asientos de los libros de intervención, no es posible apreciar por ahora este hecho, la Sección se limitará á manifestar que por más que el Gobernador, entrando en apreciaciones de probabilidades, exime de responsabilidad al Depositario Recaudador y lo hace pesar sobre los Concejales, la consideración expuesta por aquella Autoridad de que tal enmienda puede haberse hecho con siniestros fines y constituir delito del que debieran conocer los Tribunales, es por sí solo razón suficiente para abstenerse de prejuzgar un hecho que debe someterse á la acción judicial y aplazar en su consecuencia en esta parte la declaración de responsabilidad civil, que podrá ser debidamente determinada en vista del fallo que se dicte por los Tribunales.

Fundada la Sección en las consideraciones expuestas, es de parecer:

1.º Que proceda exigir á los contribuyentes las cuotas que hayan dejado de satisfacer de los impuestos votados para cubrir las atenciones del presupuesto municipal.

2.º Que de las cuotas pagadas por estos que hayan ingresado en la Depositaria municipal deben responder el Recaudador y sus herederos, y el Ayuntamiento en caso de insolvencia, á tenor de lo dispuesto en el art. 144 de la ley de 21 de Octubre de 1868, vigente en la época á que corresponden las cuentas.

3.º Que deba pasarse á los Tribunales en tanto de lo que resulta respecto á la enmienda del cargáme de que se ha hecho mérito á fin de que procedan á lo que

haya lugar, suspendiendo entre tanto exigir la responsabilidad civil por razón de esta parte del descubierto que resulta á favor de los fondos municipales.

Y conformándose S. M. el rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, el de los interesados y demás efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Abril de 1880.—Romero y Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de Lugo.

Gaceta núm. 131.

Remitido á informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Santaña contra una providencia de V. S.; por la que se declaró que la citada villa, como cabeza de distrito judicial, tiene obligación de satisfacer la mitad de los gastos de alquiler, conservación y reparación de la casa audiencia, las Secciones de Gobernación y de Gracia y Justicia de dicho alto Cuerpo han emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr. en cumplimiento de la Real orden de 20 de Febrero último, han examinado las Secciones el expediente adjunto, promovido por el Ayuntamiento de Santaña contra una providencia en que el Gobernador de Santander, de conformidad con el parecer de la Comisión provincial, desestimó su instancia pidiéndole que dejara sin efecto el acuerdo de la Junta del partido, relativo á que la Corporación recurrente satisficiera al mitad del alquiler de la casa audiencia.»

Fundándose la alzada en que no habiéndose organizado con arreglo á las prescripciones del Poder judicial los Tribunales de partido no puede obligarse á concurrir á dicho gasto en la proporción que señalan los artículos 23 y siguientes de la propia ley, y en que siendo el Real decreto de 13 de Abril de 1875 el derecho vigente en la materia, no debe abonar mayor suma que la que, según el art. 2.º del mismo, le corresponda.

Las Secciones no encuentran atendible esta pretensión, porque si bien es cierto que aun no ha tenido exacto cumplimiento la ley del Poder judicial en la parte referente á la organización de los Tribunales de partido, desde el momento en que, conforme á la regla 3.ª de la orden

del Regente del Reino de 30 de Setiembre de 1870, los Jueces de primera instancia ejercen las mismas atribuciones que aquella confiere á dichos Tribunales, hay que entender que estos se hallan funcionando, y por consiguiente que se debe á los actuales Juzgados idéntica consideración á la que en su día han de tener los Tribunales de partido.

El art. 23 de la referida ley orgánica, que trata de la manera cómo ha instalarse los tribunales en los puntos que sean cabezas de partido, y de la proporción en que los pueblos que los componen han de abonar los gastos de instalación, rige, pues, en toda su integridad; y por tanto, es indudable que la Corporación recurrente está en el caso de satisfacer, según acordaron los representantes de los pueblos que forman el partido judicial y confirmó el Gobernador, la mitad del alquiler del edificio destinado a casa audiencia, una vez que el párrafo segundo del precepto legal que se examina impone á las cabezas de partido esta obligación, que no deja de ser extraño procure rehuir el Ayuntamiento de Santaña, cuando recientemente y á su instancia se trasladó á este punto la capitalidad del partido que radica en Entfambasaguas.

Aunque el acuerdo de la Junta del partido se contrajo al alquiler del edificio, las Secciones juzgan oportuno que se haya ampliado en el sentido de que el Ayuntamiento de Santaña debe pagar también la mitad de los gastos que ocasionen la conservación y la reparación del local, porque aun cuando por tratarse de un edificio alquilado solo merced á las cláusulas del contrato de arrendamiento pueden tales atenciones pesarse sobre el partido, queda así cumplido el art. 25 de la ley orgánica, que dispone que se satisfagan en la misma proporción establecida en el art. 23. (Véase más adelante)

Los gastos de mobiliario no han de ser de cuenta del partido como indica el Gobernador, por que, á parte de que la ley orgánica, en sus artículos 23, 24 y 25, no se refiere mas que á los edificios, deben aquellos pagarse con cargo á la suma consignada en los presupuestos generales del Estado para material de los Juzgados de primera instancia.

Teniendo en cuenta, por último, que las disposiciones del Real decreto de 13 de Abril de 1875 no son aplicables al caso del expediente puesto que se

contraen á determinar la manera y proporcion con que han de satisfacerse las atenciones de las cárceles de partido, las Secciones opinan que procede desestimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto la resolución del Gobernador, en cuanto dispone que los pueblos del partido judicial de Santona sufran los gastos del mobiliario del Juzgado de primera instancia.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Abril de 1880.—Romero y Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de Santander.

QUINTA SECCION

AYUNTAMIENTOS.

Maside.

La Corporacion que tengo el honor de presidir, acordó que el Colegio para las elecciones de Diputados provinciales y Concejales, de Lagosea, titule á lo sucesivo de Baiteiro, continuando los de la Touza y Costanza en la forma que se hallan constituidos en la actualidad.

Lo que se anuncia á los efectos prevenidos en la ley vigente.

Maside 8 de Mayo de 1880.—El Alcalde, Javier Morenza.

Orense.

Por acuerdo del Ayuntamiento, se saca á subasta pública el arriendo de la recaudacion de arbitrios establecidos e impuesto indirecto de consumos, cereales y sal, durante el año económico de 1881, con arreglo á las tarifas presupuestadas de valoracion y condiciones que se hallan de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento y á las formalidades siguientes:

1.ª La subasta tendrá efecto en la Casa Consistorial de esta Ciudad á pliegos cerrados, arreglados al modelo inserto á continuacion que se entregarán al Sr. Alcalde de once á doce de la mañana del día 23 del presente mes, acompañados de carta de pago que acredite como garantía la entrega en la depositaria del mismo municipio del cuatro por ciento del tipo de subasta.

2.ª Recibidos los pliegos, se numerarán por el orden de su presentacion y por el mismo se abrirán dadas las doce del expresado día, quedando sin efecto los que no estén arreglados en su forma, alteren las condiciones y tarifas ó no cubran la cantidad de 174.706 pesetas y 52 céntimos que se señalan como tipo por resultado de la valoracion de los artículos tarifados.

3.ª Declarada la proposicion mas ventajosa, quedará hecha á favor de la misma la adjudicacion del arriendo, sujeta á los efectos de una segunda subasta que tendrá lugar á los ocho días de la primera, y sea el 31 del corriente, entregándose los pliegos de once á doce de la mañana arreglados en un todo á lo establecido para la primera subasta y aumentando un cinco por ciento cuando menos á la cantidad en que hubiese quedado el primer remate.

4.ª Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales se entenderá hasta la adjudicacion provisional á favor de la primeramente presentada, procediéndose á una licitacion oral entre sus actores y terminando con las voces de costumbre.

Orense 14 de Mayo de 1880.—José Ramos Campo.

Modelo de proposicion.

D. N. N., vecino de.... segun cédula personal que exhibe, enterado del anuncio, pliegos de valoracion, tarifas y condiciones para el arriendo de la recaudacion de arbitrios e impuesto indirecto de consumos, cereales y sal en el distrito de esta Capital por el año económico de 1880 á 1881, hace proposicion al mismo por la cantidad de.... pesetas.... céntimos por arbitrios y la de.... pesetas.... céntimos por el impuesto de consumos, cereales y sal o sea un total de.... pesetas.... céntimos.

Fecha y firma del interesado.

SEPTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Don Juan Garcia Gonzalez Juez de primera instancia del Partido de Villalba, para que por el presente se cita llama y emplaza á Antonio Fernandez Rodriguez, vecino de Santa Maria de Amarante, en el partido de Carballino, de estatura alta, pelo y cejas castaños, ojos claros y enfermizos, cara gruesa y redonda, barba afeitada y de 50 años de edad, á fin de que en el término de 15 días se presente

en este Juzgado para notificarle un auto de 10 de Febrero último, por el cual se eleva á plenario la causa que se instruye contra dicho sugeto por tentativa de expencion de moneda falsa, bajo apercibimiento de que si no lo verifica será declarado rebelde.

Al mismo tiempo se encarga á todas las autoridades y agentes de la policia judicial procedan á la busca y captura del expresado sugeto, poniéndolo á disposicion de este Juzgado con las seguridades debidas.

Dado en Villalba á 11 de Mayo de 1880.—Juan Garcia, Por mandado de S. S., Andrés Olmo.

Don Felipe Varela, Escribano del Juzgado de primera instancia de Ribadavia.

Certifico: que en incidente de pobreza promovido por Ramon Taboada contra D. Joaquin Loureiro y otros, se dictó la sentencia que dice:

»En la villa de Ribadavia á 7 de Abril de 1880. El Sr. D. Manuel Fernandez Rivera, Juez de primera instancia de la misma y su partido, habiendo visto este expediente y

Resultando: que el Procurador D. Constantino Erijó á nombre de Ramon Taboada, vecino de Puga dedujo en 28 de Junio de 1870, demanda incidental de pobreza contra Agustin Gayoso, D. Joaquin Loureiro, dona Custodia Araujo, Ramon Pousa, José Ferradas, Luis Ramon y Vicente Perez Pastor, Manuela Perez Pastor y su marido José Benito Hermida, Camilo Perez, Joaquina Perez, Luisa Perez y Bombalina Fernandez, vecinos de Gomaris, José Maria Perez Pastor y Estan Perez, vecinos de Leiro, Teodoro Rodriguez, Mariano Rodriguez, Prudencio Gonzalez, Pelagio Veloso, José Barrosa, Juan Benito Dominguez, Manuela Cuña, Camilo Fernandez, Agustin Suarez, Santiago Beinaldin, Joaquina Annaza, Fernando Lopez de Santa Maria de Espinosa, Benita Moure viuda de Pedro Alvarez de San Juan de Barran, Ayuntamiento de Pinor de Cea partido del Carballino, Ramon Alvarez como marido de Maria Moure del lugar de Moire Josefa Moure viuda de José Rodriguez de Piteira en dicho Carballino, Benito Lopez como marido de Carmen Moure de Cedreiro en Lalín y contra Don José Mosquera de San Cristóbal de Mourentan Ayuntamiento de Arbo partido de la Cañiza y Pro-

motor Fiscal fundándose en que Ramon Taboada cultiva y posee un corto número de bienes que le producen cuatro reales diarios que no ejerce industria ó profesion alguna que le sugete al pago de la contribucion de subsidio, que vive exclusivamente de la produccion de dichos bienes sin que se dedique á otra cualquiera industria que pueda contribuir á su subsistencia, y que el jornal de un bracero en esta capital de partido á inmediaciones es de cinco reales diarios y de diez por consiguiente el doble, concluyendo á que en definitiva se le declare pobre y bajo tal concepto se le ayude y defienda expidiéndosele testimonio para hacerlo constar.

Resultando: que conferido traslado á los demandados, no lo evacuaron constituyéndose en rebeldia, separándose el Procurador del demandante de la demanda respecto á Dolores Rodriguez, José Ferradas, Dona Custodia Araujo, Agustin Gayoso, Bonbelina Fernandez, Teodoro y Mariano Rodriguez que se le hubo por separado con las costas, y por acusada la rebeldia á los demandados constituidos en tales por providencia de 28 de Noviembre de 1870.

Resultando: que notificada esta providencia á los demandados rebeldes, se solicitó por los demandantes se le designase nuevo Procurador y Abogado, fundándose en el fallecimiento del Procurador D. Constantino Erijó.

Resultando: que al personado el Procurador D. Hipolito Guntin á nombre del demandante, se habieron por devueltos varios exhortos y mandó pasar al turno para la designacion de nuevo Letrado.

Resultando: que por providencia de 15 de Julio del año último de 79 se hubo por separado al Procurador Guntin de la demanda de pobreza respecto de Benita Moure, Ramon Alvarez como marido de Maria Moure y Josefa Moure vecinos del partido del Carballino.

Resultando: que oido el Ministerio Fiscal se opuso á la pretension de pobreza y recibido el incidente á prueba, se anticipó y suministró por el demandante la que creyó conveniente y concluyó el término de prueba se mandaron unir las causas á los autos y traer estos á la vista con citaciones para sentencia.

Considerando: que de la informacion suministrada por el Pro-

